

CUARTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES.
TRASCENDER EL NEOLIBERALISMO Y SALVAR A LA HUMANIDAD.

MESA 3.1

Análisis en esfera pública, democracia, gobierno e instituciones.

Legitimidad en los gobiernos latinoamericanos durante la primera década del siglo XXI. Un comparativo entre México, Argentina y Brasil

Presentan:

Dr. Adrián Galindo Castro* y Mtro. Ricardo Gaytán Cortés**.

(Resumen)

Desde hace más de tres décadas, los Estados que integran América Latina han optado por establecer formas institucionales para designar o renovar a sus gobernantes. Si descontamos la última intervención militar estadounidense en Panamá en 1989, al parecer y salvo algunas excepciones negativas en Honduras y Paraguay, las intentonas golpistas o la tentación revolucionaria han sido canceladas, solo ha quedado una vía posible para acceder al poder: el camino de las urnas. Con el advenimiento de los procesos electorales como forma predominante para gobernar, las organizaciones partidistas y sus líderes se esfuerzan por alcanzar triunfos que les permitan el acceso o la continuidad de su mandato enfrentando, no sólo a rivales de signo ideológico o programático contrario sino, más importante aún, el veredicto de los votantes que los eligieron. Así, las naciones latinoamericanas se debaten entre la esperanza generada por las promesas de candidatos y partidos y la decepción de los gobiernos que no cumplieron con las expectativas puestos en ellos. En el panorama latinoamericano podemos percibir dos tendencias para formar gobiernos: gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Si bien en la experiencia histórica se han presentado casos en que es difícil diferenciar que tan de izquierda o derecha es un gobierno, podemos establecer que la primera tendencia se caracteriza por estar totalmente plegada a criterios de instancias financieras internacionales y la segunda pretende lograr, a partir

* Dr. en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Coordinador de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

** Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

del manejo de los recursos nacionales, una mejor distribución de la riqueza. El presente trabajo pretende encontrar bajo términos como legitimidad democrática o redes de confianza, conceptos utilizados por autores como Pierre Rosanvallon y Charles Tilly, algunos elementos para descifrar el ascenso y el desgaste de proyectos de izquierda y derecha en la región latinoamericana concretamente en tres casos: el Partido Acción Nacional en México como partido gobernante, El Partido de los Trabajadores de Brasil en la era Lula y el periodo de los Kirchner en la Argentina.

La trayectoria de bloques rivales en la conducción de gobiernos latinoamericanos.

Como ya mencionamos las premisas de las que parte este ensayo son: primero, podemos distinguir con un nivel confiable de certeza que en América Latina existe una confrontación a nivel de gobiernos entre tendencias de izquierda y tendencias de derecha, y no simplemente entre tendencias democráticas y tendencias autoritarias como una visión politológica conservadora quiere mostrar para esta región (Schedler, 2016). Segundo, independientemente de la línea que las coaliciones partidistas y demás organizaciones políticas se propongan seguir, existe una dependencia de los ciclos de expansión y recesión del capitalismo global que imposibilita a los gobiernos -sean de izquierda o de derecha- alcanzar sus objetivos en términos de un modelo de economía en crecimiento que legitime su permanencia en el poder por tiempo prolongado (Robinson, 2013).

Para situar la existencia de una dicotomía izquierda derecha a nivel de gobiernos en el territorio latinoamericano es preciso contextualizar históricamente la preeminencia de estas corrientes ideológicas en la búsqueda del poder político. En el presente ensayo partimos de la idea que esta lucha se ha venido dando en distintas etapas y con distintas posibilidades; de entrada podemos decir que los gobiernos de izquierda tuvieron una muy limitada posibilidad de permanecer y expandirse debido al método propuesto para ello: la revolución como horizonte sólo logró consolidarse en Cuba desde 1959 con el triunfo de Fidel Castro y en Nicaragua después de la Revolución Sandinista en 1977 para ser, posteriormente, desplazada del poder por la vía electoral en 1990 (Williamson, 2013).

Algo distinto sucede con los gobiernos de derecha en esta región del mundo debido a que siempre han tenido un predominio en la conducción de los gobiernos. El dilema de este tipo de jefaturas radica en las disputas ideológicas heredadas de la emancipación como colonias españolas, las cuales tuvieron un dejo de continuidad a lo largo de siglo y medio de vida independiente. Las disputas entre conservadores -quienes pretendieron conservar una especie de potestad monárquica- y liberales -quiénes asumieron como credo la vía republicana de corte aristocrático- derivó en amplios periodos de inestabilidad política, donde la solución militarista fue una modalidad muy recurrente hasta el punto de ser la dictadura caudillista o colegiada la fórmula más registrada en dos siglos de existencia de los Estados latinoamericanos (Rouquié, 2011).

Fue precisamente el inicio de la metamorfosis de las economías latinoamericanas pasando de una exclusiva estructura agraria y minera heredada de la colonia a la creación de un sector industrial sustentado en una visión modernizadora de las naciones, el proceso de transformación que facilitó la irrupción del movimiento obrero y sus distintas formas de organización partidista. Estos proyectos modernizadores introdujeron en el tablero político la presencia de un tercer actor al cual habría que tomar en cuenta para legitimar la conducción de Estado. La configuración de las masas trabajadoras, como imaginario del pueblo, integró no sólo las demandas salariales y de seguridad laboral de los obreros y demás trabajadores urbanos, planteó además la posibilidad de un bienestar generalizado sustentado en la acción gubernamental cuyo principal papel consistía en generar fuentes nacionales-estatales de explotación productiva, regular las relaciones obrero-patronales con un mínimo de seguridad social, proporcionar bienes y servicios para la población en general y, en algunas naciones con el potencial y la tradición de lucha de los sectores populares, ofrecer un subsidio básico a la población vulnerable.

La formación de pactos y alianzas oscureció la percepción sobre las posiciones liberales y conservadoras e incorporó de manera velada la ideología socialista en el panorama latinoamericano. De tal suerte el nacionalismo -ideología con que se vistieron gobiernos cívico militares que tomaron el poder por vías no necesariamente electorales pero ampliamente legitimadas- intentó recuperar tanto el impulso industrializador como las demandas populares en una síntesis contradictoria la cual, a los pocos años, sufrió un desgaste y descrédito del cual se valieron las nuevas fuerzas políticas de sectores ilustrados de la clase media para proponer una alternativa democrática a la sucesión del

poder político en la región. Efectivamente desde los años tenebrosos de la dictadura o del despotismo autoritario de los gobiernos civiles (como el PRI en México) se fueron reactivando o vigorizando formaciones políticas quienes buscaron imponer la vía electoral como método único para acceder y renovar el control del Estado.

En consecuencia no podemos hablar de una tradición democrática en América Latina, ni siquiera una continuidad de procesos electorales como mecanismo básico para renovar el poder político; si acaso, vivimos una coyuntura histórica desde la caída del socialismo real y la crisis de la deuda que inauguró la década perdida de los años ochenta donde, al difuminarse el comunismo como el principal “enemigo” de las sociedades occidentales, los militares perdieron cualquier argumento sólido para derrocar gobiernos electos por vía del voto (Roitman, 2006).

Lo mismo ocurrió con la propuesta político partidista del desarrollismo nacionalista, la cual pretendió fincar el crecimiento económico sostenido en la planta productiva nacional, apuntalada ésta con la decidida intervención estatal en rubros como la creación de infraestructura, el fomento a la industria básica vía empresas estatales, el control de las finanzas y el mercado de divisas; el resultado final: ineficacia del aparato productivo, endeudamiento externo, devaluación de la moneda, procesos inflacionarios, fuga de capitales y un enorme déficit gubernamental provocaron la pérdida de la autonomía estatal en el manejo de la economía, la firma de convenios con organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial principalmente) y, derivado de esos compromisos, la adopción de reformas estructurales de corte neoliberal sintetizadas en el llamado “Consenso de Washington”. Los severos ajustes afectaron directamente a la población al retirarse las políticas de bienestar generalizadas (enfoque universalista) para sustituirse por políticas focalizadas de combate a la pobreza extrema. Al ser desplazados los gobiernos proteccionistas nacionalistas, los nuevos gobiernos neoliberales cubrieron sus medidas impopulares con la legitimidad de los procesos electorales; de tal suerte, y ante el estrecho margen que la crisis provocó en la región, la libertad para organizarse políticamente y participar en procesos electorales efectivos fue el paliativo para aminorar el malestar de un nuevo modelo de acumulación que catapultaba al gran empresariado, a través del libre comercio internacional, a la emergente economía global, mientras los sectores medios y las clases trabajadoras se veían atrapadas entre una avalancha de consumismo promovida por la cultura mediática incluyendo la incorporación del Internet en la vida cotidiana y el deterioro progresivo de

las condiciones laborales al convertirse el trabajo precario en la moneda de cambio para atenuar la desocupación crónica.

En este contexto la izquierda, sea vista como nacionalista popular o como alternativa socialdemócrata, han tendido que adecuar sus estrategias de lucha para participar en la arena electoral, teniendo en cuenta que no puede optar por una modificación sustantiva del patrón de acumulación instituido por las agencias internacionales, y a sabiendas que recurrir al financiamiento público para liderar políticas redistributivas (fuente de su legitimidad frente a las masas) conlleva a una tensión entre acciones afirmativas y finanzas sanas. Considerando la experiencia histórica de gobiernos identificados como de izquierda, la ineficiencia, corrupción, despilfarro además del sabotaje de las grandes cadenas de comunicación masiva, la élite empresarial nacional, consorcios transnacionales, organismos financieros internacionales son algunos de los males que han experimentado los programas gubernamentales de las administraciones de izquierda (Roitman, 2013).

En tanto, la derecha ha debido renunciar de manera abierta a sus golpes de fuerza - cuando no a intervenciones extranjeras- para ajustarse al supuesto juego democrático; aun así, el descontento de las clases trabajadoras por las medidas neoliberales y la competencia de los partidos progresistas representan un desafío a su mandato. Los nuevos movimientos sociales, pese a su heterogeneidad, no han podido romper la hegemonía alcanzada por el dominio imperante del capitalismo global, la penetración de los medios de comunicación, el espejismo del acceso al consumo generalizado y la penetrante ideología acerca de que cualquier desviación del modelo impuesto por los organismos financieros internacionales es una salida en falso de consecuencias desastrosas. De tal suerte, los partidos movimiento o las coaliciones que retoman sus banderas, en el momento que alcanzan el triunfo electoral modifican su radicalismo la mayor de las veces puramente discursivo; enfrentan una tenaz oposición de los partidos y coaliciones de derecha en la oposición por lo que se ven impedidos a cumplir con el programa de cambios anunciado en su plataforma de campaña y al modificar o renunciar a sus propuestas más avanzadas pierden el apoyo de las masas populares (Gómez, 2016).

Por su lado los partidos de derecha, moderada o abiertamente neoliberal, cuentan con líderes formados en los centros académicos o institucionales empresariales; son

versados en el manejo de medios de comunicación masiva, principalmente la televisión, los cuales favorecen indiscutiblemente a candidatos acordes con sus intereses y; principalmente, este tipo de políticos manejan un discurso triunfalista sustentado en el credo del mercado como pócima mágica para todos los problemas estructurales de los asuntos públicos; sin olvidar la crítica a todo lo que “huela a populismo” a quien tildan de irresponsable y temerario, siendo la principal causa de las crisis, los desajustes y deformaciones de la economía y generador de la pobreza de la región.

Con todo y su maquinaria propagandística y ocultadora de los graves problemas, los gobiernos conservadores de derecha han debido conceder espacios para que se manifieste el desacuerdo social con un modelo que sólo beneficia a unos cuantos y excluye de los beneficios a la mayoría de la población. El uso y abuso de la política social como dispositivo para evitar la protesta social han sido el mecanismo empleado tanto por gobiernos de derecha como de izquierda para paliar el deterioro provocado por los ajustes estructurales y la mercantilización de áreas anteriormente protegidas de los bienes colectivos.

Las clientelas políticas han proliferado en terreno fértil debido a la capacidad de los gobiernos por comprar las voluntades de los beneficiarios de los programas gubernamentales, pero el costo ha sido doble: por un lado; los beneficios no se han derramado sobre el conjunto de las capas proletarias sino en los sectores más susceptibles de movilización electoral; por otro, al reducirse el margen de maniobra de los gobiernos considerados en este trabajo (México, Argentina y Brasil) debido a la caída de las exportaciones de materias primas o la privatización de fuentes de financiamiento del Estado, las lealtades se trastocan en reclamos y éstos en el retiro de apoyos a los gobiernos constituidos.

Al recurrir a las mismas tácticas para administrar al Estado los gobiernos, tanto identificados con la izquierda como los definidos como de derecha, van reduciendo el margen de maniobra para establecer un proyecto viable a mediano y largo plazo. Las crisis recurrentes en el subcontinente dan cuenta de la fragilidad que tiene el neoliberalismo como régimen socioeconómico para sepultar las metas alcanzadas por la etapa desarrollista-nacionalista pero también señalan la imposibilidad de regresar a una versión contemporánea de la misma.

El parecido en la manera de gobernar -en las experiencias históricas tomadas como casos- ha hecho que las distinciones ideológicas se diluyan en consideraciones de tipo personal como las de oponer políticos honrados y capaces frente a corruptos y demagógicos, argumento éste empleado como expediente fácil por los críticos de la derecha sin que ello signifique ausencia de eventos que respalden esos juicios. El populismo como término ambiguo para identificar esta forma de hacer política expresa la ambivalencia que posee gobernar para el corto plazo de la izquierda partidista pero igualmente se aplica al método que se han valido gobiernos de derecha –por lo menos los tres mexicanos en el siglo XXI- para conseguir victorias electorales una vez que comprobaron su inviabilidad para generar bienestar desde su postura conservadora. A pesar de los contrastes existentes en ellos, la inestabilidad se constituye como el carácter de los gobiernos latinoamericanos y da una visión pesimista para un futuro inmediato dada la poca capacidad del Estado para guiar hacia una economía de bienestar.

La democracia indispensable, la legitimidad democrática y las redes de confianza.

A pesar de este panorama incierto y dividido debemos recalcar los factores estructurales comunes en la región en las últimas décadas mencionados en un inicio. En primer lugar la inclusión latinoamericana en las cadenas productivas globales con la consecuente especialización de ciertos sectores de la economía orientados hacia el exterior y el deterioro de algunos segmentos tradicionales así como la dependencia de la oscilaciones en la economía global. Dependencia que se ha hecho más visible en los últimos años en los gobiernos de izquierda que aprovecharon el boom de las materias primas y la expansión China a fin de llevar a cabo tímidas políticas redistributivas y que fueron golpeados de manera más fuerte por la desaceleración económica global. Mientras que los gobiernos de derecha han aprovechado la relativa estabilidad macroeconómica de que gozan y la internacionalización de valores capitalistas apelando a la responsabilidad económica y el fantasma del populismo, ejemplificado por los problemas de los gobiernos de izquierda, así como el uso de los programas sociales de una manera clientelista, para sortear los vaivenes globales, e incluso en el caso mexicano han profundizado en las reformas de corte neoliberal, matizadas, como la reciente reforma laboral y energética.

Esta diferencia entre izquierda y derecha nos lleva al segundo punto, como mencionamos en un inicio, más que un enfrentamiento entre tendencias democráticas y autoritarias, tenemos un enfrentamiento entre dos visiones de desarrollo, la izquierda busca cierta redistribución aprovechando la intervención del Estado en la economía, facilitada en su momento por los altos precios de las materias primas, mientras que la derecha hace énfasis en la estabilidad y el mercado, y por lo tanto en la disciplina macroeconómica, la preferencia por el capital privado y la gobernabilidad. En medio de esta discusión sobre el desarrollo tenemos un respeto cada vez más irrestricto a lo que podemos llamar las reglas del juego. La mayoría de los gobiernos mencionados se han legitimado en las urnas, desde el fin de las dictaduras militares y la descomposición de los regímenes autoritarios, la democracia, procedimental y mayoritaria, ha sido la norma en la región.

Lo cual no ha exceptuado casos de excepción a la regla de la pérdida del poder en las urnas, como lo fueron Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, con la defenestración de sus presidentes elegidos democráticamente y destituidos por los poderes legislativos y judiciales en alianza con sectores conservadores de sus sociedades, lo que a decir de Marcos Roitman (2016) constituye una nueva modalidad de golpes de Estado, Brasil al momento de escribir estas líneas se encuentra en esa tesitura con los ataques por parte de sectores de la derecha aliados con la judicatura y la posibilidad del juicio político contra la mandataria Dilma Rouseff, o bien renuncias ocasionadas por manifestaciones populares multitudinarias como la de Fernando de la Rúa en Argentina 2001. Sin embargo, estas han sido excepciones y una vez superadas las situaciones que llevaron a ellas se ha vuelto al procedimiento democrático, si bien, históricamente la democracia ha sido coyuntural parece que cada vez se normaliza más como método de traspaso del poder.

Por lo que hablar de democracia es lo que nos lleva a la necesidad de legitimidad que tienen los gobiernos tanto de izquierda como de derecha entre su electorado a fin de triunfar en las urnas y legitimar su actuación y su proyecto político y a la segunda parte del presente ensayo.

Manuel Alcántara (2011, 152) nos recuerda que todo régimen político se sostiene en un precario equilibrio en la sociedad que gobierna mediante la invocación de la legitimidad, como confianza subjetiva basada en última instancia en creencias, y en la eficacia, como

el cumplimiento de expectativas y necesidades. Precisamente ello nos lleva a dos autores que buscan explicar la legitimidad al interior de las democracias contemporáneas, Pierre Rosanvallon y Charles Tilly mediante el desglose de la nueva legitimidad democrática y de las redes de confianza y su inclusión en la política.

Rosanvallon (2011) refiere que ante la crisis de legitimidad de las democracias contemporáneas, originada por el agotamiento de lo que denomina la legitimidad del establecimiento, fundada en las decisiones de las mayorías y la existencia de un cuerpo administrativo identificado con el interés general, de la que son deudoras las democracias latinoamericanas en especial en su primer faceta, y por lo tanto, nos dice, derivado de la transformación de la sociedad que pasa de una sociedad basada en la generalidad a una sociedad basada en la particularidad, es necesario el establecimiento de nuevos tipos de legitimidad. Por ello propone tres tipos adicionales de legitimidad democrática: la dimensión de imparcialidad, relacionada con autoridades independientes cuya legitimidad se sostiene en una imparcialidad negativa basada en que nadie puede beneficiarse con ningún privilegio, la dimensión de legitimidad reflexiva, la cual se enfoca principalmente en las cortes constitucionales y su recto actuar y la legitimidad de proximidad basada en una relación más dinámica, abierta y transparente de los gobernantes con los gobernados. Propuesta sumamente interesante que sin embargo abandona las desigualdades estructurales de la sociedad y en especial confía demasiado, en el caso de la legitimidad de imparcialidad y reflexiva, en la rectitud de los participantes y su capacidad de resistir intereses y mantenerse alejados de las pasiones mundanas, basándose en su preocupación por el bien común. Difícilmente aplicable en Latinoamérica en especial considerando su historial de sesgos, visible en los gobiernos de derecha respecto al capital, pero también en gobiernos identificados como de izquierda en cuanto al favorecimiento de ciertos sectores por encima de otros.

Mientras que Tilly no aborda directamente la legitimidad democrática, sino que refiere a los procesos, y mecanismos, que inciden en la democratización o desdemocratización de un régimen. Si bien reconoce que hay diferentes formas de definir a la democracia, ya sea desde una perspectiva constitucional, sustantiva, procedimental o procesal (Tilly, 2010: 37), deja de lado dichas perspectivas y propone una revisión dinámica que pueda dar cuenta de los avances, pero también de las regresiones. Por lo cual, centrándose en los procesos que inciden en la democratización de un régimen, nos dice que “es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y sus

ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas” (Tilly, 2010: 45).

A su vez este resultado se logra mediante la unión de tres procesos separados cuya interacción es indispensable para lograr la democratización, el aumento de la integración de las redes interpersonales de confianza con la política, el aumento de la separación de la política pública de las principales desigualdades de rango en torno a las que los ciudadanos organizan sus vidas cotidianas y la disminución en la autonomía de los principales centros de poder (Tilly, 2010: 55).

En el caso latinoamericano y en especial en los tres países que nos interesan, México, Argentina y Brasil, la legitimidad de establecimiento de Rosanvallon ha resultado ser la regla. Las decisiones mayoritarias, tan recurridas y a su vez tan criticadas en el caso de los gobiernos de izquierda, los casos de Brasil y Argentina, y el apoyo en el caso de los gobiernos de derecha de sectores reducidos de la ciudadanía, México, en el que los escenarios electorales se encuentran generalmente en estado de menor efervescencia, son demostradas elección tras elección, y con base en ellas estos gobiernos justifican sus decisiones y reclaman la legitimidad democrática. Los gobiernos de derecha no apelan a las grandes masas populares, al contrario de sus homólogos de izquierda que en su confrontación con los sectores capitalistas tienen que considerar a sus bases de apoyo generalmente deudoras de movilizaciones populares y movimientos sociales, sino a sectores de la clase media preocupados por una posible deriva populista y a sectores clientelares adquiridos mediante el despliegue de programas sociales con fines electorales. Incluso el segundo componente de la legitimidad del establecimiento, la formación de burocracias identificadas con el bien común, deja que desear ante los múltiples intentos de los gobiernos tanto de izquierda como de derecha de cooptar aquellas instancias gubernamentales que escapan a su control inmediato, o bien si hay instancias que han logrado autonomía, por ejemplo los bancos centrales, lo hacen inmersos en una visión que tiende a favorecer el consenso económico dominante en el caso de los gobiernos de derechas.

Mientras que las redes de confianza si bien fueron inclusivas en algún momento, en el caso de Brasil, con la incorporación de múltiples sectores populares en la esfera estatal derivados de las políticas redistributivas exitosas en los gobiernos de Lula, y vivieron una reconstrucción en el caso Argentino después de la debacle a inicios del milenio y en

el caso de México derivado de la esperanza de la llegada de un gobierno de oposición durante el año 2000 y la simpatía que suscitó el candidato ganador, estas redes se han ido desgastando, en especial en el caso mexicano derivado de los problemas de seguridad a partir del combate contra las drogas por parte de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) y en Brasil empezaron a cimbrarse en conjunto con los escándalos de corrupción y la crisis económica así como en Argentina.

Por lo que parece haber un retroceso en la integración de redes de confianza en la política a fin de favorecer la democratización, así como una nula preocupación por parte de los gobiernos latinoamericanos, del signo que sean, por promover alternativas a la legitimidad de establecimiento.

Conclusiones

Los gobiernos latinoamericanos identificados con la derecha o la izquierda responden a visiones diferentes sobre el desarrollo, ya sea mediante la macro estabilidad económica y el dominio del mercado o bien mediante medidas redistributivas apoyadas por el Estado que buscan en última instancia la justicia social. A pesar de ello ambas tendencias se ven condicionadas por la economía internacional y los límites en los ingresos estatales. A su vez la democracia se ha convertido cada vez más en el método para acceder al poder y dentro de ella la legitimidad juega un papel importante, no solo de manera limitada sino que es necesario ampliarla implicando una mayor integración de los ciudadanos en el Estado, la cual por el momento no se ha visto reflejada en las acciones gubernamentales y al contrario parece haber un retroceso.

Bibliografía

- Alcántara, M. (2011). *Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio*. México: FCE.
- Gómez, H. F. (2016). *Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil*. México: FCE.
- Robinson, W. (2013). *Una teoría sobre el capitalismo global. Producción, clase y Estado en un mundo transnacional*. México: Siglo XXI.
- Roitman, M. (2006). *Las razones de la democracia en América Latina*. México: Siglo XXI.

- (2013). *Tiempos de obscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*. Madrid: Akal.
- (21 de marzo de 2016). Nuevo mapa de los golpes de Estado en América Latina. *La Jornada*. Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2016/03/21/opinion/016a2pol>
- Rosanvallon, P. (2010). *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad y proximidad*. Madrid: Paidós.
- Rouquié, A. (2011). *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*. México: FCE.
- Schedler, A. (2016). *La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios*. México: FCE.
- Tilly, C. (2010). *Democracia*. Madrid: Akal.
- Williamson, Edwin (2013). *Historia de América Latina*. México: FCE.